

**DISCURSO DE LA REPRESENTANTE DEL PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS EN BOLIVIA, LUCIANA MERMET, EN EL ENCUENTRO INTERNACIONAL “DEMOCRACIA Y ELECCIONES EN AMÉRICA LATINA: ENTRE AVANCES, RIESGOS Y DESAFÍOS”.**

Muy buenos días a todas y todos, en principio quisiera felicitar a los equipos de las instituciones que permitieron que estemos aquí reunidos.

A lo largo del evento tendremos la oportunidad de compartir experiencias y lecciones del último ciclo electoral en la región latinoamericana con las autoridades y expertos electorales de por lo menos 10 países. Lograr la reunión de todos estos países en un encuentro internacional ya de por sí es un gran mérito para el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia, el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (CEELA), la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

En este encuentro tendremos la oportunidad de compartir vivencias y reflexiones de lo que llamamos un súper ciclo electoral. Con la experiencia agregada de varios países vamos a recolectar mucha evidencia.

Quiero reconocer a nuestro socio principal: el Tribunal Supremo Electoral y, a través del TSE, a los nueve Tribunales Electorales Departamentales, la institucionalidad electoral del país, por la valentía con la que ha enfrentado los contextos difíciles por los que ha atravesado Bolivia; quiero reconocer al Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (CEELA), a la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) porque fueron los socios ideales para empezar una reflexión de la manera más sistemática.

Nuestra alianza como PNUD en Bolivia tiene cierta data, en esta coyuntura política se remonta al 2019, a un momento donde desde el PNUD nos dimos cuenta de la necesidad de generar espacios de diálogo, espacios para el análisis plural de los actores políticos, institucionales y de la sociedad civil en función de cómo ejercemos y cómo se administra el sistema democrático. Creemos que este tipo de encuentros son los espacios idóneos para promover y profundizar este tipo de conversaciones y sobre todo de cara a lo que el OEP se comprometió, que es reforzar su institucionalidad como el vehículo para fortalecimiento de la democracia, que es el objetivo que nos debía unir.

Para ello organizamos este encuentro y nos da muchísimo gusto poder asociarnos a este esfuerzo con el apoyo del CEELA y la universidad pública de Santa Cruz. Quiero reconocer de manera muy especial a los países amigos de Bolivia y de América Latina y el Caribe, Suecia y España, que posibilitan materializar estas iniciativas, quiero públicamente reconocer el apoyo y la confianza que va para largo plazo en Bolivia.

Déjenme remarcar la importancia de este encuentro poniendo un poquito de cifras de contexto, de evidencia. Aquí como todos saben queremos utilizar estos días de trabajo y de reflexión para hacer un balance, queremos ver un poco qué es lo que ha pasado en 2020, el 2021; pero sobre todo cómo nos ubicamos hacia el flujo del ciclo electoral que va a culminar en la región en 2025 y para Bolivia también va a ser así.

Al menos en este periodo, 18 países de la región desarrollaron o desarrollarán procesos electorales. Entre el 2020 y 2021 tuvimos seis elecciones en 2021: Bolivia, Ecuador, Perú, Nicaragua, Chile y Honduras; el 2022 tres: Costa Rica, Colombia y en breve tendremos la de Brasil; y lo que queda para el 2024 seis países: México, El Salvador, Panamá, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Muchos de esos países están aquí representados a través de sus autoridades; y el 2025 para Bolivia nuevamente se iniciará un nuevo ciclo electoral por la elección general. Estos eventos son procesos electorales intensos y que al mismo tiempo tuvieron que operar en contextos más complejos aún en el marco de polarizaciones políticas, de tensiones generadas por el manejo de una pandemia que nadie esperaba y que llegó para quedarse. Tenemos que trabajar en estos contextos para hacer lo que los órganos electorales saben hacer bien y deben hacer bien, que es dar legitimidad de origen a los gobernantes y las gobernantes electas y garantizar así el ejercicio de la democracia.

¿Qué significa este súper ciclo electoral? Esto significa que hay unas 400 millones de personas inscritas en los padrones electorales que están demandando a nuestros organismos electorales idoneidad técnica; transparencia en la gestión de las operaciones electorales y la certificación de resultados creíbles, y esta no es una tarea menor en la consolidación de la democracia. Un dato fundamental de este ciclo electoral es que tenemos una ciudadanía más informada y más exigente en

torno al respeto del voto y, de esta forma se genera una mayor presión colectiva respecto a las expectativas que tiene la ciudadanía en torno a la gestión electoral.

Esta situación no es menor, ya que vivimos muchas presiones los contextos políticos y social que se complejizan y exigen un desarrollo institucional más complejo y sofisticado de parte de los organismos electorales y, de la propia democracia. Hay un par de cuestiones que me gustaría señalar en estos contextos de complejización de la demanda social y de la percepción ciudadana respecto de la calidad de nuestras instituciones democráticas donde nuestros organismos electorales están al centro, porque son los administradores y garantes, y aquí tenemos el caso de la incorporación de demandas de grupos y sectores sociales que no necesariamente estaban incluidos en las dinámicas políticas e institucionales. Tenemos más jóvenes, mujeres y pueblos indígenas que no solo quieren una mayor participación y representación en las instancias políticas y estatales, que es una demanda legítima, sino que también quieren incorporar nuevas visiones, lecturas y formatos de acción colectiva que los partidos y, en parte, las instituciones estatales no logran canalizar de manera adecuada o con el ritmo esperado y esto genera un cuello de botella en los sistemas de representación.

Esto genera cierto nivel de desencanto, frustración y lo que en última instancia nos preocupa como Naciones Unidas es la posibilidad de que esto erosione la institucionalidad democrática, generando apatía colectiva –que podría ser uno de los resultados– o posiciones antiinstitucionales y antidemocráticas que podrían generar efectos muy perniciosos a largo plazo.

Otro gran fenómeno que hemos observado desde el PNUD y que va a ser uno de los elementos de reflexión en estos dos días es el uso de nuevas tecnologías. Las redes sociales, su expansión y la extensión en el nivel de penetración que está teniendo en la opinión pública, que es algo que nunca habíamos visto antes en la historia democrática, o en la corta historia democrática de la región, que no tiene mucho más de 40 años. Esto paradójicamente a pesar de los beneficios que las redes sociales, las nuevas tecnologías podrían traer en términos de reducción de costos, de optimización en el uso de los recursos, también nos está trayendo efectos perniciosos vinculados a las noticias falsas que inciden en una manera perniciosa en la vida social y política de nuestros países, guerras mediáticas y digitales. Todos estos fenómenos distorsionan y terminan corrompiendo la

participación y deliberación plural que debe ser sustentada en argumentos razonables, posiciones legítimas e información veraz. Esos son desafíos enormes ante los que nos enfrentamos y muchas veces nuestros órganos electorales no cuentan con los recursos para poder atacar el orden de magnitud de estos desafíos.

De alguna manera, estos dos fenómenos que señalaba nos empujan o hacen que se pierdan esos espacios de diálogo y de encuentro democrático que tienen que ver con la construcción del espacio público, y aquí es un síntoma de erosión democrática que tiene que estar al centro de nuestra reflexión. Si no lo reflexionamos desde la institucionalidad electoral, va a ser muy difícil que se ubique en el centro de la discusión pública de los actores políticos, y esto también nos va a ayudar a deconstruir algunas de narrativas que alimentan estos fenómenos. ¿Qué nos ha dado esto? Creo que es un fenómeno bastante característico en los últimos años en la región latinoamericana y el Caribe en países desarrollados, que tiene que ver con un incremento significativo de la polarización discursiva que lo que hace es empobrecer básicamente el debate político de los actores, y lo que hace también es achicar el espacio para poder identificar agendas institucionales que encuentren sus puntos de convergencia y que nos permitan construir hacia adelante el desarrollo de la democracia.

A partir del análisis que hizo el PNUD en alianza con los grandes centros de pensamiento de la región, a nivel regional existe un incremento significativo de desconfianza en torno a la transparencia y la institucionalidad electoral, esto debería dar señales de alarma para todos nosotros en torno a cómo lo resolvemos. Entre los años 2006 y 2020, el Latinobarómetro midió el nivel de confianza de los organismos electorales en las ciudadanía latinoamericanas. Lo que vemos es que ha bajado más de 10 puntos, en 2006 era 49,6% y en 2020 este nivel de confianza bajó al 32,3%. Debemos preguntarnos, ¿qué es lo que está midiendo y qué es lo que está pasando? Esta situación preocupa porque si hay un daño a la credibilidad de la institucionalidad que está vinculada a una fragilidad y precariedad, entonces le va a tocar a los organismos electorales trabajar esta erosión y aquí el argumento puede tornarse un poco circular; pero es el argumento con el que hay que trabajar.

Entiendo que estos son algunos de los asuntos que serán parte de nuestra agenda de análisis, intercambio y debate a lo largo de estos dos días del encuentro internacional. Para nosotros será muy interesante poder reflexionar de manera

conjunta, con la experiencia internacional de la región; pero también con los expertos que están reflexionando de manera transversal estos temas y poder, con un aprendizaje colectivo, avanzar con mirada de futuro.

En lo personal, estoy en Bolivia desde hace tres años y medio y me tocó ver de muy cerca estos fenómenos, también conocer el conjunto de interacción de los actores y lo que quiero es reiterar que hay en Bolivia una convicción política sobre la validez del sistema democrático y un compromiso para trabajar en su fortalecimiento, que está sentado aquí, en esta mañana.

En muy poco tiempo Bolivia festejará 40 años de vida democrática, de reinstalación del sistema democrático que, al igual que muchos de nuestros países, inició su periplo a principios de la década de los 80. A lo largo de esos años sabemos que la población asimiló el ideal normativo de establecer un orden político sustentado en la igualdad ciudadana y la soberanía popular. Generó estructuras y dispositivos institucionales para generar un círculo virtuoso en torno a la construcción de la democracia y que, de alguna manera, se convierta en el medio para garantizar; pero también para procesar las demandas colectivas. Lo que vimos también en estos 40 años de democracia en la región es que tuvimos diseños, rediseños, reingeniería en los organismos institucionales electorales, que estuvieron a la altura de las circunstancias para organizar la participación y representación política, permitiendo un procesamiento adecuado de la responsabilidad pública de la ciudadanía en el cumplimiento de sus derechos políticos. Esto, desde nuestro parecer, es una conquista que debe ser un acuerdo en este encuentro, no deberíamos aceptar que haya vuelta atrás respecto de estas conquistas y de estos diseños institucionales de los que se dotaron estos países latinoamericanos. Es primordial que resguardemos y defendamos como un bien público. Me atrevo a decir que es un bien público regional la calidad democrática en América Latina y que sea un capital tangible la institucionalidad como intangible la capacidad de esa institucionalidad para responder en lo colectivo e institucional.

A finales de 2019, las bolivianas y bolivianos enfrentaron una coyuntura crítica que realmente puso en vilo al sistema democrático y quiero reconocer públicamente que el OEP canalizó la dinámica política de entonces, de una manera institucional y democrática. Esto ha sido, desde nuestra perspectiva, un ejemplo a seguir de cómo los diferendos políticos pueden resolverse democráticamente. Esto fue el resultado

tangible que no solo permitió resolver la crisis política de Bolivia en 2019, si no que permite tener un sentido de dirección de hacia dónde debe dirigirse Bolivia. Una de las enseñanzas que nos queda como Naciones Unidas es la necesidad de acompañar técnicamente y tener esos resortes institucionales para que los organismos electorales a nivel general puedan ser estables, puedan estar bien financiados y puedan asegurar el rol que deben cumplir.

Los procesos electorales de Latinoamérica nos dejan muchísimas enseñanzas, queremos escuchar en estos dos días la perspectiva comparada que permita hacer mejores balances de los procesos electorales, también queremos aprender las innovaciones, el hecho de fortalecer la institucionalidad tiene que dejar el espacio para la innovación institucional y esto es uno de los desafíos que los organismos electorales deben plantearse de cara al futuro en la tarea de la consolidación democrática.

Solo me queda agradecer a todas las autoridades electorales, organismos de asistencia electoral, analistas e investigadores, entre otros. Aquí tenemos una oportunidad de definir cuál es la futura agenda de retos institucionales de los organismos electorales de la región, tendremos jornadas de muchísimo debate y estoy segura de que el mensaje y las conclusiones de una Declaración de Santa Cruz que podamos lograr al concluir este encuentro internacional mañana nos van a dejar no solo constancia de la importancia que tiene el órgano electoral en la profundización de la democracia en la región, sino que también nos van a dejar un sentido de dirección y compromiso en el cual Naciones Unidas, y puntualmente el PNUD, no solo quiere, sino debe ser parte.

¡Muchas gracias y en hora buena para este evento!

**Santa Cruz de la Sierra, 18 de agosto de 2022**